

“Trabajo presentado en el VI Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político”. Del 5 al 8 de Noviembre de 2003

Apellido y Nombre: SERVETTO, Alicia María

DNI: 17.361.023

e-mail/ teléfono: eral@infovia.com.ar // tel. 0351-4648298

Entidad a la cual pertenece o Representa: Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba

Panel: Area Política Comparada

Opción 1: Transición y consolidación democráticas comparadas

Opción 2: Populismo, Identidades políticas y Territorialidad: enfoque comparativo

Título: Instauración y crisis de la democracia en los escenarios provinciales. Un estudio comparado de los casos de Formosa, Córdoba y Mendoza

INSTAURACIÓN Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN LOS ESCENARIOS PROVINCIALES. UN ESTUDIO COMPARADO DE LOS CASOS DE FORMOSA, CÓRDOBA Y MENDOZA

1. Introducción

La inauguración de una nueva etapa política en la historia Argentina después de 1983 trajo aparejado paralelamente una renovación del marco conceptual en las ciencias sociales. Una de sus consecuencias fue la revalorización de la historia política, enriquecida con el aporte teórico de la ciencia política y despojada de las clásicas concepciones que sostenían la mecánica interdependencia entre procesos económicos y políticos.

Bajo estos nuevos presupuestos teóricos, las cuestiones que comenzaron a prevalecer en las investigaciones sociales versaron acerca de las posibilidades de consolidar el régimen democrático. Algunos intentaron armar una respuesta desde el presente mirando hacia el futuro; otros buscaron en el pasado las raíces de la crónica inestabilidad política-institucional. En esta última línea de investigación, se propone el presente trabajo que pretende constituir un aporte al estudio del proceso político argentino a partir de indagar los procesos internos y los actores políticos y sociales principales de las dinámicas provinciales y su incidencia en el proceso de instauración y crisis de la etapa democrática inaugurada en 1973.

En efecto, después de las elecciones generales de 1973 y del triunfo del justicialismo en casi todo el territorio nacional, diferentes provincias fueron escenarios de situaciones conflictivas que trascendieron sus respectivos marcos institucionales para proyectarse y dirimirse en áreas del poder central. En la mayor parte de los casos, el inicio de los conflictos estuvo asociado a las pugnas internas del partido gobernante, el peronismo, y a la distribución de los cargos entre los diferentes sectores que conformaban el oficialismo. Esta situación tendió a agravarse después de la elección de Perón como Presidente de la República, hecho que marcó el comienzo de una ola ofensiva tendiente a desplazar los sectores ligados o apoyados por la izquierda peronista, a fin de reemplazarlos por los grupos más ortodoxos y verticalistas.

Con la instauración de la democracia en 1973, y más precisamente con la llegada de Perón al poder se produjeron situaciones conflictivas en distintas provincias, cinco de las cuales fueron intervenidas por el gobierno nacional: Formosa (noviembre de 1973), Córdoba (marzo de 1974), Mendoza (agosto de 1974), Santa Cruz (octubre de 1974) y Salta (noviembre de 1974). En todos los casos se trató de la intervención de un gobierno peronista a una administración provincial del mismo signo partidario, cuyos gobernantes habían sido electos con más del 49% de los votos, es decir que habían llegado al poder con un amplio apoyo electoral.

Desde este ángulo de preocupaciones, esta ponencia pretende revisar no sólo por qué se produjeron los hechos, sino también cómo se produjeron. A partir de los casos de Córdoba, Mendoza y Formosa, el trabajo plantea los siguientes objetivos:

- a) Identificar los actores sociales y políticos relevantes y que papel cumplieron en el proceso político inaugurado en 1973
- b) Revisar las dinámicas políticas provincia y sus principales nudos conflictivos.
- c) Comparar las semejanzas y diferencias que podemos encontrar en cada uno de los aspectos mencionados, y qué nivel de generalidad es posible establecer,
- d) Analizar la incidencia de dichos fenómenos provinciales en el proceso de instauración y crisis de la democracia.

En virtud de estos objetivos, tratamos de esbozar algunas líneas analíticas y de plantear algunas hipótesis de trabajo desde una perspectiva comparada que se propone examinar las dinámicas políticas particulares de cada provincia y destacar su incidencia en el funcionamiento del sistema político argentino y en el proceso de crisis del régimen democrático inaugurado en 1973.

2. Conformación del mapa político y resultados electorales

El llamado a elecciones generales por parte del Presidente A. Lanusse en 1971 abrió un período de transición política caracterizada por la atomización del campo político y la participación de nuevos actores sociales y políticos que instalaron nuevas demandas en la esfera pública (la guerrilla urbana, las ligas agrarias, el movimiento estudiantil, el sindicalismo disidente, etc.). Igualmente se reactivó la vida interna de los partidos quienes,

después de un largo período de inactividad, debieron reorganizarse y adaptarse a los imperativos de las transformaciones políticas y sociales sufridas en el país a fines de la década del '60 y principios de los '70, transformaciones que no sólo pusieron en evidencia la debilidad del régimen, sino que además introdujeron nuevas formas de hacer política que desbordaron los cauces tradicionales de la acción partidaria.

Este proceso que caracterizó a la Argentina de forma general, tuvo en cada escenario regional sus características particulares y, en general, los partidos políticos recobraron su centralidad en el escenario político, redefiniendo en muchos casos su discursos, prácticas y estrategias políticas al calor de las nuevas demandas de los 70. El Partido Peronista sufrió una importante transformación a partir de las diferentes vertientes ideológicas y políticas que convergieron en él. Se reorganizó en todas las provincias y estuvo inmerso en enfrentamientos intrapartidarios para definir los candidatos de la fórmula gubernamental. En general, se trató de la disputa entre los sectores de la izquierda peronista y el sector sindical, y la correlación de fuerzas dependió de los diferentes aliados que pudieron conformar en los respectivos escenarios provinciales.

En Formosa, la disputa entre las dos listas que reclamaban la representación del peronismo, terminó con la intervención, por parte de la Cámara Nacional Electoral, del PJ. La convención justicialista se reunió a mediados de febrero de 1973 y eligió como candidatos Antenor Argentino Gauna y Ausberto Ortiz (Secretario General de la CGT). Entre ambos sumaron los apoyos de la Juventud Peronista (JP), la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF), el Frente Coordinador de Acción Gremial, los estudiantes universitarios y la CGT regional.

Similar proceso interno se evidenció en el PJ cordobés en el cual también se disputaron dos listas en las elecciones internas. En junio de 1972, las diferentes vertientes que conformaron el peronismo local (los sectores ortodoxos, el sindicalismo legalista, la juventud revolucionaria) se realinearon en alianzas y adhesiones para disputar la conducción partidaria y la fórmula gubernamental para las elecciones provinciales. La Lista Unidad encabezada por Ricardo Obregón Cano, contó con el apoyo de la izquierda peronista y el sector legalista de las 62 organizaciones con Atilio López a la cabeza. La fórmula Ricardo Obregón Cano-Atilio López se impuso con el 60% de los votos,

derrotando a Julio Antún quien, acompañado por Alejo Simó, representante de la ortodoxia sindical, había exigido durante la campaña una conducción íntegramente ortodoxa¹.

En Mendoza, el Partido Justicialista fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre los distintos sectores que lo integraban que se hizo manifiesto en la nominación de los cargos electivos durante el congreso del Partido Justicialista (17/12/72,) oportunidad en la que acordaron las lista de candidatos para legisladores provinciales e intendentes municipales, pero se planteó una dura lucha por la designación del candidato a Gobernador. Entre los cinco postulantes, ninguno logró imponerse sobre los demás, por lo que las diferentes fuerzas terminaron cerrando filas en torno a la figura de Alberto Martínez Baca.² Para Vicegobernador fue postulado Carlos Mendoza, figura proveniente de la estructura sindical metalúrgica, impulsado por José I. Rucci.³

Los otros partidos también sufrieron procesos de significativa importancia al calor de las transformaciones políticas e ideológicas de la época. Ricardo Balbín retuvo la conducción del radicalismo a nivel nacional, luego de las internas que lo enfrentó a líder del Movimiento de Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín. En este proceso, cada uno de los distritos provinciales se alineó con algunos de los sectores que pugnaban por la conducción partidaria. El radicalismo de Formosa y Córdoba apoyó la fórmula de los pre-candidatos presidenciales del Movimiento de Renovación y Cambio, R. Alfonsín y C. Storani, mientras que en Mendoza, la UCR respondía a las filas del balbinismo y a su binomio Ricardo Balbín - Eduardo Gamond.

Cabe destacar la participación en Mendoza del Partido Demócrata (PDM) ya que resultaba la segunda fuerza en importancia dentro del espectro político mendocino, cuya fórmula gubernamental fue Eduardo Vicchi-Manlio Ardigó. Esta agrupación, que había ocupada la gobernación de Mendoza en varios períodos de la historia institucional de la

¹ Un mayor desarrollo del proceso interno del PJ cordobés puede verse en el libro de mi autoría *De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada*, Córdoba, Ferreyra Editor, 1998 y Gabriela Closa "Las prácticas del peronismo de Córdoba, 1971-1973 y las tensiones en su identidad política" en Mónica Gordillo (edit.): *Actores, prácticas y discursos en la Córdoba combativa*, Córdoba, Ferreyra Editor, 2001.

² Martínez Baca había sido un dirigente del sur de la provincia cuyo antecedente más destacado fue la de haber integrado la fórmula encabezada por Ernesto Corvalán Nanclares en las elecciones de 1966, con la que el peronismo había enfrentado a sectores neoperonistas liderados por Alberto Serú García.

³ Carlos Mendoza había sido miembro del equipo denominado Central de Actualización Sindical (CASA) integrado por activistas ligados a la Democracia Cristiana, que mantenían posiciones antivandoristas, cercanos a la CGT de los Argentinos.

provincia, durante todo el proceso de reorganización interna sufrió un desgaste importante producto no sólo de las luchas internas, sino también por la “colaboración” prestada al gobierno de la Revolución Argentina cuya actuación en la provincia no gozaba de apoyo popular, sobre todo por los actos represivos durante las jornadas del “mendozazo” en abril de 1972.⁴

Los resultados electorales del 11 de marzo de 1973 dieron un triunfo significativo al Partido Justicialista. Las fórmulas gubernamentales de las provincias, por su parte, tuvieron resultados dispares y en los tres casos se debió asistir a una segunda vuelta electoral para definir la fórmula ganadora. Veamos a continuación los cuadros que reflejan los resultados electorales tomando como referencia los dos partidos mayoritarios:

Resultados electorales
en las elecciones del 11/3/73 para presidente y vice
(resultados provisorios)

	Formosa	Córdoba	Mendoza
FREJULI	65,9	44,8	49,2
UCR	26,5	36,4	18,3

Resultados electorales
en las elecciones del 11/3/73 para gobernador y vice
(resultados provisorios de los dos partidos más votados en cada una de ellas)

	Formosa	Córdoba	Mendoza
FREJULI	45,71%	42,9%	46,94%
UCR	25,66%	41,8%	
PDM			21,27%

⁴ Entre 1970 y 1972 ocupó la primera magistratura el dirigente demócrata Francisco Gabrielli, quien había sido electo gobernador en 1961 y 1963, depuesto por los golpes de Estado de 1962 y 1966, respectivamente. Le sucedió su correligionario Félix Gibbs (1972-1973). Entre marzo y abril de 1972, se llevaron a cabo una serie de protestas en repudio al aumento de las tarifas eléctricas dispuesto por el gobernador Gabrielli, que en algunos casos llegó hasta el 300%. El 4 de abril de 1972 la CGT había convocado un paro de dos horas, al que se adhirieron el gremio de los maestros quienes ya llevaban 20 días de huelga. Las fuerzas policiales reprimieron con bastones, perros y tanques hidrantes. El saldo fue un muerto del Sindicato de Diarios y Revistas, dos heridos de bala, 146 automóviles quemados y, perjuicios varios en los comercios céntricos.

La segunda vuelta se produjo el 15 de abril y confirmó la hegemonía del peronismo que ya se había dado a nivel nacional.

Resultados electorales en la segunda vuelta (15/4/73)
para gobernador y vice (resultados provisorios)

	Formosa	Córdoba	Mendoza
FREJULI	70,2%	53,3%	71,46%
UCR	27,9%	45,5%	
PDM			25%

Fuente de los cuadros: elaboración propia a partir de los datos del diario *La Nación*, marzo y abril de 1973.

Este primer mapa político de las situaciones provinciales permite ubicar las relaciones de fuerza existentes en cada una de ellas al iniciarse el período de institucionalización. Por cierto, una primera lectura de los datos nos proyecta dos cuestiones claves del escenario político. En primer lugar la fuerte hegemonía del peronismo en cada una de las provincias analizadas, a excepción de Córdoba, donde el porcentaje de diferencia entre los dos primeros partidos no llegó a superar los 10 puntos. En segundo lugar, no existió una correlación estrecha entre el porcentaje de votos para los candidatos presidenciales y los candidatos a ocupar las gobernaciones respectivas del mismo signo partidario. En los tres casos, la fórmula del peronismo se definió en una segunda vuelta electoral. En Córdoba, el porcentaje de votos para la fórmula Balbin-Gamond (36,4%) fue mucho menor que el obtenido para la fórmula provincial de Martínez-Celli (43%). Similar situación se produjo en Mendoza donde los votos para la Alianza Republicana Federal, integrada por el PDM, alcanzaron los 64.369 votos, mientras que para la fórmula de gobernador y vice del PDM llegaron a los 111.200 votos.

Esta primera mirada de los escenarios políticos de las provincias, nos posibilita entrar ahora a analizar cada escenario en particular, con la dinámica que le imprimieron los actores y el devenir histórico.

3. La dinámica política de la provincia de Formosa: ascenso, crisis y caída del gobierno popular.

Formosa fue el último territorio nacional que se provincializó en junio de 1955. Producido el golpe de estado de la Revolución Libertadora, Formosa asistió a sus primeras elecciones para la reforma constitucional de 1957. El 25 de mayo de 1973 asumieron las nuevas autoridades constitucionales, electas con más del 70% de los sufragios en segunda vuelta. El Justicialismo iniciaba así el tercer gobierno constitucional de la provincia (después de los intentos frustrados de 1958 y 1963), y el primero con su signo partidario, con un amplio consenso social.

El gobernador electo, Antenor Gauna había actuado principalmente como gremialista docente, representando al gremio del magisterio en el Comité Central Confederal de la CGT en el segundo gobierno de Perón. Contó con el apoyo de diferentes sectores sociales, políticos y gremiales de Formosa, tales como la ULICAF, el Frente de Coordinador de Acción Gremial Estatal, el Sindicato del Personal Público de Formosa (SEPPFOR), la Juventud Peronista de Formosa, etc. Sin embargo, ni en su gabinete, ni en la legislatura estos sectores tuvieron una participación principal. Por el contrario, la JP prácticamente estuvo ausente de los cargos electivos de la Cámara de Diputados como así también de los cargos del Poder Ejecutivo. Tampoco ocuparon cargos los dirigentes del gremio de los estatales y los dirigentes de la ULICAF. Pero el sector desplazado fue el que respondía al vicegobernador, Ausberto Ortíz, que esperaba cierta actuación en el gobierno, luego de haber trabajado y apoyado el binomio Gauna-Ortíz.

La invocación al General Perón como elemento unificador y garante al mismo tiempo de autoridad, no fue suficiente para eliminar los factores de tensión y conflicto. Estos se pueden concentrar en dos focos de conflicto que se articulaban con la escasa autonomía del gobernador para resolver con eficacia los problemas planteados: a) la cuestión de los campesinos y la problemática de la tierra; b) la relación con el vicegobernador, el gremialismo y la legislatura.

a) La cuestión de los campesinos y la problemática de la tierra

Hacia 1970 Formosa constituía una sociedad predominantemente rural. El 53,92% de la población vivía en el campo y el 46,08 en los centros urbanos. La estructura productiva de la provincia estaba ligada a la actividad ganadera asentada en grandes propiedades de tierra y a una economía agraria doméstica ligada al trabajo de campesinos minifundistas, pequeños productores que prácticamente trabajaban en una economía de autosubsistencia, produciendo algodón como cultivo para el mercado. Desde 1968 se había iniciado una política de privatización de tierras públicas, favoreciendo fundamentalmente a medianos y grandes productores, y a las sociedades anónimas. Los campesinos quedaron excluidos de este proceso de privatización de las de tierras fiscales contribuyendo a profundizar la crisis de los minifundios.

En este contexto, tuvo lugar el surgimiento del movimiento de campesinos, cuyos orígenes se remontan al año 1965 a través de las actividades que realizaba la Iglesia Católica en los medios rurales con el fin de evangelizar y alfabetizar a la población campesina. Estas actividades, impulsadas por el Obispo Scozzina, se transformaron en el Movimiento Rural de la Diócesis de Formosa al que adhirieron miles de familias campesinas. Si bien, en principio, estuvieron ligadas a objetivos religiosos, con el tiempo abarcaron problemáticas de tipo social. En 1972 se convirtió en la Unión de Ligas Campesinas de Formosa (ULICAF) adquiriendo definitivamente un perfil de entidad organizada. Representaba a los pequeños productores y campesinos acuciados por la política de distribución y adjudicación de las tierras fiscales, agrupando a más de 5.000 familias. “*Tierra para todos, Patria de ese modo*” fue la consigna que encabezó las grandes movilizaciones campesinas, que incluyeron cortes de ruta, ocupaciones de campos y cortes de alambrados.

Gauna logró ganarse el apoyo de la ULICAF, quienes, si bien negaron toda connotación partidista, en varias ocasiones apoyaron las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo, a quien demandaban fundamentalmente revisar todas las adjudicaciones y permisos de ocupación de tierras realizadas desde el 30/6/66 hasta el 24/5/76. Esta

demanda se concretó con el Decreto N° 408 y la Ley N° 339 sancionada por la Cámara de Diputados.⁵

Este decreto abrió un frente de conflicto con la Sociedad Rural de Formosa, quien inició una ofensiva movilizándolo a los sectores agropecuarios miembros de su entidad y acudiendo a las autoridades nacionales para su intervención en el asunto. De hecho, exigían la ratificación del 85% de las adjudicaciones, ya que sólo un 15% se hallaban fuera de la ley.

De esta forma, el gobierno de Antenor Gauna tuvo que responder, por un lado, a las demandas planteadas por parte del sector de quien había recibido el apoyo –ULICAF- y, por otra parte, hacer frente a los cuestionamientos de la Sociedad Rural. Por momentos el gobernador logró satisfacer ambos grupos, concretando la entrega de tierras, desafectando determinada cantidad de hectáreas para planes de colonización, incorporando representantes de las Ligas en la Dirección de Tierras Fiscales, y ratificando, en algunos casos, las adjudicaciones cuestionadas.

En septiembre de 1973, los diputados radicales presentaron un proyecto por el cual se declaraban de utilidad pública y sujetos a expropiación una superficie de 370.000 ha. pertenecientes a 9 sociedades anónimas. Este proyecto, solamente logró incorporarse al temario de la Cámara de Diputados, y su tratamiento quedó suspendido frente a los conflictos políticos que concluyeron con la intervención federal a los tres poderes de la provincia.

b) Del conflicto sindical a la resistencia parlamentaria.

Tal como hemos expresado, Antenor Gauna logró conquistar el apoyo de Ausberto Ortíz, secretario general de la CGT de Formosa, para integrar el binomio gubernamental. Las primeras divergencias entre ambos mandatarios surgieron cuando se decidieron nombres elegidos para ocupar los diferentes cargos ministeriales. En el gabinete decidido por Gauna solo dos funcionarios provenían de las filas gremiales, y ambos respondían verticalmente al Gobernador, por lo que el sector liderado por Ortíz estuvo completamente desplazado de los organismos de conducción del Estado provincial.

⁵ La Ley N°339 declaraba de utilidad pública sujetos a expropiación y/o caducidad y/o anulación total o parcial de predios y/o derechos reales que sobre ellos tuvieren y/o propietarios pretendieren tener sus respectivos adjudicatarios y/o propietarios. La Ley incluía aproximadamente a unas 49.000 ha.

La disputa en torno a la distribución de los cargos tuvo su primer manifestación pública el 11 de julio cuando las “62 organizaciones peronistas” rompieron explícitamente sus relaciones con el gobernador al solicitar que se instruyera juicio político al mismo. La respuesta de Gauna fue desplazar del gobierno a los dos representantes del sector gremial y designar en su lugar a representantes de la JP.⁶

La lucha por el poder y la tensa relación de fuerzas en el seno del Poder Ejecutivo se trasladó a la legislatura en donde Ortiz, como presidente de dicho cuerpo colegiado, contaba con más respaldo.⁷ En este sentido, la resistencia del bloque de diputados peronistas fue uno de los frentes de conflicto centrales para entender el proceso que condujo a la crisis del gobierno de Antenor Gauna. Enumeraremos algunos de los hechos más significativos :

- Desde sus primeros días de funcionamiento, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Juan de Rosa Benítez, y un grupo de legisladores peronistas, adujeron problemas formales para el juramento y asunción del Gobernador y Vicegobernador electos.
- Una de los primeros proyectos presentados por el diputado Benítez fue la reglamentación del juicio político. Quedó promulgada, con el voto de los 25 integrantes. Una vez promulgada, entró el pedido de juicio político a Antenor Gauna.⁸
- El enfrentamiento con el Jefe de Policía de la Provincia a raíz del episodio suscitado con el diputado provincial Cortéz, quien acusó a los policías de la localidad El Chorro de desacato y falta de respeto a la Cámara de Diputados a través de su persona. Este hecho derivó en un conflicto de poderes con el Jefe de Policía, quien expresó que los Diputados, si bien poseían fueros respetables, detrás de ellos podía esconderse algún delincuente. El Gobernador apoyó la conducta de la policía provincial.
- El pedido de desafuero para el diputado Benítez por parte de la Justicia Chaqueña por falsificación de documentos públicos en forma reiterada. Interpretado como una operación política del Gobernador, el diputado recibió la adhesión de la HCD que acusó de

⁶ Eliazile Pedrozo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Rafael Menéndez en la Subsecretaría de Recursos Naturales

⁷ La legislatura de Formosa era unicameral, con un total de 25 bancas que se distribuían de la siguiente forma: 12 del PJ, 6 del MID y 7 de la UCR.

⁸ Fue acusado, entre otros cargos, de mal desempeño en sus funciones, nepotismo, nombramientos ilegales, cesantías arbitrarias, mal manejo de los fondos públicos, etc. Diario *La Mañana*, Formosa, 16/11/73.

ineficientes a “quienes tenían la obligación de mantener la vigilancia y la prevención de la seguridad provincial”. El mensaje aludía a las figuras del Hugo Gauna, Ministro de Gobierno -hermano del gobernador-. La solicitada fue firmada por Ausberto Ortiz.

3.1 Crónica de un final anunciado

La situación institucional de Formosa en la que se conjugaron los diversos factores analizados, fue trasladada al gobierno nacional donde intervinieron el Ministro del Interior, Benito Llambí y el Secretario General de la Presidencia, Vicente Solano Lima. Resultaba difícil encontrar soluciones concertadas. Mientras el HCD aprobaba el juicio político a Gauna por el cual se lo suspendió por 60 días, designando en su lugar al Vice-gobernador Ausberto Ortiz, Gauna, por otra parte, solicitaba al Congreso Nacional la intervención federal al Poder Legislativo.

El 16 de noviembre de 1973, formalmente existieron dos gobernadores. Frente a este conflicto, el PEN envió al Congreso de la Nación los antecedentes relativos a la crisis formoseña, quedando en manos del parlamento nacional la decisión final. Todo el debate giró en torno a la interna peronista, al papel del gobierno central y al problema de la sanción de algunas leyes provinciales relacionadas a la expropiación de las tierras. El bloque mayoritario sentó sus posiciones sobre la idea de que Formosa se había convertido en un provincia “desquiciada” que vivía los efectos de una “subversión institucional” frente a un gobierno “ineficiente”, “un estado de inercia en los poderes públicos” y, un gobernador poco “idóneo”.

Finalmente, el 17 de noviembre de 1973 el Congreso Nacional, con los votos del bloque justicialista, sancionó la Ley de Intervención Federal a los tres poderes de la provincia de Formosa.⁹

4. El peronismo en el gobierno de Córdoba: entre la revolución y la restauración

El gobierno de Obregón Cano tuvo el apoyo de la izquierda peronista local, cuyos principales dirigentes ocuparon cargos en la legislatura provincial, en el parlamento

⁹ Los interventores designados fueron: Rómulo Rodríguez Fox (19/11/73 - 6/12/73), Juan Carlos Beni (7/12/73 - 30/6/75), Juan Carlos Taparelli (1/7/75 - 5/11/75) y Horacio Carlos Gorleri (6/11/75 - 24/3/76).

nacional y algunos cargos en el ejecutivo provincial. Sin embargo, el gobernador no representaba de modo excluyente a la izquierda revolucionaria. Por el contrario, tendió a ocupar la posición central del espectro político que se reveló en la conformación del gabinete con figuras provenientes del campo político-partidario tanto del PJ, como de la UCRI y de otras organizaciones menores. Igualmente, uno de los senadores nacionales del PJ militaba en las filas de la Democracia Cristiana. Por último, a pocos días de su asunción firmó con la UCR una acta de compromiso por la regulaban la competencia partidaria y las relaciones entre gobierno y oposición.

No obstante estos intentos de concertación, el gobierno de Obregón Cano se enfrentó a un importante arco de oposición que incluyó a actores centrales del escenario político – social de la provincia.

4.1. Líneas de fractura y conflictos internos

El gobierno de Obregón Cano desde el inicio de su gestión debió sortear una serie de dificultades que confluyeron en la formación de un arco opositor debilitando el consenso inicial del gobierno. Entre los más importante, podemos citar:

- a) la regulación del comercio de la carne en defensa de los consumidores que generó un enfrentamiento con los ganaderos y comercializadores agrupado en la Cooperativa Obrera de la Industria de la Carne (COINCAR);
- b) la sanción del Estatuto Básico del Personal Docente de Enseñanza Privada de la Provincia de Córdoba que regulaba la actividad de la docencia en las escuelas privadas que significó una férrea oposición de los colegios privados religiosos y de la jerarquía eclesiástica provincial,
- c) la reorganización de los cuadros policiales y la reincorporación de los cesanteados en 1955, eliminando el 30% de la "bonificación por riesgo" que disfrutaban hasta entonces;
- d) la ofensiva de la estructura nacional de la CGT a fin de llevar adelante la normalización de la regional de Córdoba y desplazar a los sectores disidentes del movimiento obrero local. Esta ofensiva se articuló con un doble reclamo: 1) el reclamo del aumento salarial de los obreros del transporte urbano que desató un conflicto entre la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), que

derivó en un enfrentamiento entre el Vicegobernador (dirigente de la UTA) y el Intendente de Córdoba, Juan Carlos Avalos, quien sostenía que la huelga era propiciada desde la Casa de Gobierno; 2) la lucha de los trabajadores de Fiat para encuadrarse sindicalmente en el SMATA y no en la UOM, que requirió la intervención directa del Gobernador ante las autoridades nacionales.

e) La oposición generada desde el Partido peronista local con la designación de Luis Longhi, abogado de la UOM, como interventor del mismo. Sus primeras declaraciones expresaron que llegaba a Córdoba con la intención de defender la pureza ideológica del peronismo, sin importar las funciones que ocuparen los infiltrados.

Estas tensiones iniciales fueron mostrando un gobierno que fue perdiendo capacidad para asumir la iniciativa política. Se mostró poco eficaz para resolver problemas que afectaban a amplios sectores de la población y con escasa autonomía con respecto al liderazgo de Perón.

4.2. El golpe policial y la intervención provincial

Obregón Cano tenía dos frentes de conflicto, el sindical y el político, y en ambos casos, se trataba de un enfrentamiento entre la izquierda revolucionaria, que demandaba una mayor radicalización de las políticas públicas y, la derecha político-sindical que exigía un verticalismo a ultranza con los lineamientos de Perón.

En este contexto, a los nueve meses del gobierno constitucional, se produjo el golpe policial, conocido como el “navarrazo” (28/2/74), por el cual se detuvo al gobernador, al vice y a otros funcionarios. Este hecho tuvo el apoyo de la oposición anti-obregonista de Córdoba, el aval de las autoridades nacionales a través de las figuras del Ministro del Interior y del Ministro de Trabajo¹⁰, y finalmente con el proyecto de intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia –no se intervino el poder legislativo ni judicial- enviado por Perón al Congreso Nacional. El mensaje que acompañó al proyecto, argumentaba que las autoridades elegidas *"no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función"*, y *"sin percatarse se fueron alejando de la revolución auténtica"*: *"(...) el gobierno toleró y*

¹⁰ El Ministro de Trabajo, Ricardo Otero, garantizó el plenario normalizador de la CGT que sesionó en la localidad de Alta Gracia, por el cual quedó conformado el nuevo secretariado, excluyendo a los dirigentes de Luz y Fuerza, Smata, UTA, entre otros. El plenario se llevó a cabo el mismo 28 de febrero.

*hasta fomentó a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública (...)*¹¹. La condena al “desorden” político no recaía sobre el accionar del Jefe de Policía, sino sobre las autoridades gubernamentales que habían “tolerado” la presencia de elementos perturbadores y habían fomentado situaciones conflictivas. En consecuencia, el proyecto de intervención operó como un mecanismo de legitimación al golpe policial.

Por su parte, la oposición antunista adhirió públicamente al pronunciamiento efectuado por las fuerzas policiales y apoyó la intervención por considerar que era el “*único remedio a la situación de caos, violencia, inoperancia, y negociados*”. Desde el otro extremo ideológico, la organización Montoneros de Córdoba, mientras exigía la reposición en el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, cuestionó las limitaciones del gobernador depuesto: “*La debilidad mayor de Obregón Cano y que debilitó a su gobierno fue la de no recurrir a las bases, no asentar su gobierno en la movilización popular, creer en los arreglos burocráticos o en las trenzas de Buenos Aires*”.

Ciertamente, la polarización del sistema político provincial terminó por enfrentar al gobierno tanto con la izquierda como con la derecha peronista, y ambos sectores transformaron su oposición al gobierno en una oposición al sistema. Obregón Cano fue perdiendo espacio político para moverse y por ende la posición central terminó por fracasar.¹²

5. La crisis política mendocina

Existe un viejo lema en la política argentina que dice: en el peronismo todo está permitido, menos perder el poder. Esta idea parece haber sido la dominante en la dinámica política interna del peronismo mendocino luego de las elecciones de 1973. La fórmula triunfante del FREJULI, compuesta por Alberto Martínez Bacca y Carlos Mendoza lejos estuvo de ser una expresión de la unidad peronista local.

El peronismo de Mendoza estaba dividido en múltiples fracciones, que abarcaban desde las divisiones internas del neoperonismo, las diferentes líneas del peronismo

¹¹ Diario de Sesiones de la HCS de la Nación, Año 1974, T.IV, p.3618 y ss

¹² Los interventores designados fueron: Duilio Brunello (marzo-septiembre del 74), Raúl Lacabanne (septiembre del 74 a septiembre del 75), Raúl Bercovich Rodríguez (septiembre del 75 a marzo del 76.)

ortodoxo, hasta las disputas internas de sindicalismo y de las 62 organizaciones peronistas. Frente a esta compleja correlación de fuerzas al interior del peronismo, la candidatura de Martínez Bacca fue un triunfo del sector más verticalista, en oposición al poder que había construido el neoperonismo en la década del 60.

Las principales contradicciones de la fórmula gubernamental quedaron evidenciadas en las acciones y discursos de ambos candidatos: mientras Martínez Baca supo ganarse el apoyo de los sectores juveniles y más combativos del peronismo, con un discurso centrado en la construcción de un Estado socialista, Carlos Mendoza resaltaba que no era hombre de izquierda y que el movimiento obrero dentro del peronismo era el anticuerpo para la izquierda y para la derecha.

5.1 La Lucha por el control de los Ministerios

Las relaciones de fuerzas después del 25 de mayo de 1973 se concentraron en la lucha por el control de los ministerios del Poder Ejecutivo. La legislatura era controlada por el sector político y sindical más ortodoxo, y sólo le correspondió a la JP un 25% de bancas. Con la legislatura en las manos, los sectores políticos y sindicales se unificaron para disputar los principales ministerios, cuestionando a los ministros designados.¹³

Días antes de la asunción del Gobernador, los principales dirigentes sindicales le presentaron una lista de 19 personas que no debían formar parte del gobierno por ser sospechosos de marxismo y trotskismo, que podían “originar una situación de descontento y desconfianza” en los sectores gremiales. No obstante ello, el gabinete conformado por Martínez Baca distó de respetar las exigencias del sindicalismo. Por el contrario, incluyó a militantes de la Juventud Peronista y a personas vetadas por los sindicalistas.

Desde el 13 de julio, con la renuncia del Presidente Cámpora, Mendoza pasó a integrar la lista de las provincias cuestionadas. Desde entonces, la ofensiva lanzada por el sindicalismo local entró en una segunda etapa, profundizando el quiebre de relaciones entre el Gobernador y el Vice, este último acompañado por el sindicalismo, la estructura partidaria, diputados, concejales e Intendentes. Los emplazamientos al gobernador tuvieron

¹³ Los funcionarios cuestionados fueron: Ministro de Gobierno, Eduardo Zannoni, Cultura y Educación, Francisco Reig, Subsecretario de Gobierno y Municipalidades, Juan Carlos Cerutti, Secretaría General de la Gobernación, Horacio Martínez Baca, Secretaría Privada de la Gobernación, Hugo Mantovani, entre otros.

un carácter cada vez más amenazante hasta el mes de noviembre, en que el mismo Perón intervino para sugerir cambios conciliatorios.

Con las instrucciones a los gobernadores a través de la “orden reservada” impartida por el Consejo Superior (1/10/74), por la cual se anunciaba el inicio de una guerra contra los elementos infiltrados en el movimiento, el sindicalismo mendocino contó con la herramienta necesaria para exigir la definitiva reestructuración del gabinete. Se aliaron en esta lucha el presidente provisional de la Cámara de Senadores y dirigente sindical Edgardo Boris, el Presidente de la Suprema de Justicia, y varios legisladores provinciales del peronismo quienes manifestaron la necesidad de que en Mendoza comenzara a gobernar el justicialismo.

En esta línea de acción, el Congreso Justicialista emplazó al Gobernador para que en 72 hs. procediera a modificar su gabinete y al equipo de colaboradores más inmediatos. El Gobernador desconoció las exigencias advirtiendo que no se sometería al “capricho de ningún grupo o sector” y “los que dicen que hay marxismo, tendrían que señalármelos con nombre y apellido”.¹⁴

El 22 de octubre estalló una bomba en el despacho privado del Gobernador y como muestra de apoyo la Juventud organizó un acto para defender al gobierno con la adhesión de 26 gremios.

La renuncia del Secretario General de la Gobernación, Horacio Martínez Baca –hijo del Gobernador-, la aceptación de las renuncias de cinco de los seis miembros de su gabinete, y la disposición de Martínez Baca para formar una “comisión mediadora” integrada por dirigentes y autoridades partidarias para constituir un nuevo gabinete, fueron los primeros pasos que se dieron a fin de encontrar una salida política a la crisis interna del peronismo local.

Sin embargo, la asunción de los nuevos ministros (2/11/73) fue nuevamente cuestionada por una Comisión del PJ, al extremos de acusar a Martínez Baca de inconducta, indisciplina, violación de los principios y de las resoluciones de los organismo partidarios”.¹⁵

¹⁴ Diario *Los Andes*, Mendoza, 18/10/73

¹⁵ Diario *Los Andes*, Mendoza, 5/11/73

Desde Buenos Aires, Benito Llambí, Ministro del Interior de la Nación, y José Martiarena, Secretario General del CSMNJ, exigieron resolver la situación y realizar un cambio completo de gabinete. El 6 de noviembre, nombró nuevos funcionarios del equipo gubernamental, del cual resultaron desplazados los ministros cuestionados, y con ellos, la JP perdió todos sus puestos en el gobierno provincial.

5.2. De la distensión al Juicio político

El pleito entre la CGT y el justicialismo mendocino con el gobernador encontró un principio de solución cuando el sector gremial dejó en libertad a Martínez Baca para cubrir el cargo del ministerio de Bienestar Social.¹⁶ Si bien se trató de una tregua, esto duró escasos días. Los nuevos objetivos ya no se concentraron solamente en cuestionar a los colaborados, sino, más aún, lograr la destitución del gobernador.

En los primeros días del mes de febrero de 1974 se realizó una asamblea a la que se llamó “Cabildo Abierto”, una reunión plenaria convocada por E. Cardozo. Bajo el lema “*¡Perón, Mazorca, los zurdos a la horca!*”, se presentó el proyecto por el que se exigía la separación de todos los funcionarios del Estado provincial que hubiesen sido cuestionados o identificados como infiltrados ideológicos por actuar al servicio del proyecto político de la autodenominada “Tendencia Revolucionaria”, la renuncia a las bancas de todo legislador o concejal sancionado por el partido y exhortar a los ministros del Poder Ejecutivo a renunciar a sus cargos.

A fines de febrero, Martínez Baca se reunió con Llambí y E. Cardozo (interventor del PJ). Allí establecieron las bases para la solución del conflicto. Una de las cláusulas fue la eliminación del Cabildo Peronista. A su vez los mismos ministros debían realizar la depuración en sus propias carteras ministeriales, en consulta con el Consejo Provincial del movimiento. Es decir, la permanencia de Martínez Baca en el poder estuvo condicionada al alejamiento de todos sus principales colaboradores, a través de una operación de depuración ideológica intra-peronista e intra-gobierno. A principios de abril, la legislatura decidió dar el paso definitivo e impulsó el juicio político. Las argumentaciones se

¹⁶ Finalmente, el conflicto con la CGT en torno a las ternas para el ministerio de Bienestar Social, concluyó con la no presentación de la misma, ya que ello implicaba, según su posición, aceptar un condicionamiento. Diario *Los Andes*, Mendoza, 29/11/73.

originaron a raíz de las investigaciones que el Senado hizo de las operaciones de la bodega estatal GIOL, en la cual se involucró al gobernador y a su hijo. El dictamen de la comisión del juicio político fue aprobado por mayoría, con el voto de radicales y demócratas.

El gobernador dirigió un último mensaje en ocasión del aniversario del 25 de mayo en el que formuló un enérgico llamado a la pacificación y unión de los sectores políticos “en contra de los enemigos comunes” exhortando enfáticamente: “¡Basta de invocar al General Perón falsamente!, ¡Basta de hacerse las víctimas y traten todos de cumplir con su deber!”.¹⁷ Días después fue suspendido y se hizo cargo del Poder Ejecutivo el vicegobernador, Carlos Mendoza.

Por cierto, la lucha política intraperonista se concentró en los cargos del Poder Ejecutivo, ya que prácticamente la legislatura era controlada por el sector sindical y político opositor al Gobernador. Martínez Baca contaba con el apoyo de la JP, algunos legisladores, 4 de los 18 intendentes, y unos pocos gremios; Carlos Mendoza, logró reunir en torno suyo la adhesión de las autoridades de la CGT, la mayoría de los legisladores, la estructura partidaria, intendentes y gran parte del gremialismo mendocino. Frente a este cuadro de situación ¿por qué la resolución del conflicto mendocino no concluyó con la intervención federal inmediata tal como lo solicitaban los sectores opositores, y en cambio, esta se demoró hasta agosto de 1974? Las alternativas para pensar una respuesta pueden ser las siguientes:

- Martínez Baca tenía el respaldo del Secretario de la Presidencia, Vicente Solano Lima, quien le había aconsejado que se desprendiera de algunos de sus colaboradores para poder mantener su línea política.
- Igualmente, el Gobernador no era identificado como representante excluyente de la Tendencia Revolucionaria, ya que, en forma reiterada, diferentes sectores le exigían solamente la re-estructuración del gabinete.

6. Reflexiones finales

El escenario socio-político post-cordobazo se caracterizó por la irrupción una ola de protesta opositora al régimen de la Revolución Argentina. Se instalaron nuevas demandas

¹⁷ Diario *Los Andes*, Mendoza, 26/5/74.

ligadas a las consignas de la liberación nacional, la revolución socialista, el cambio de estructuras económicas y sociales, etc.

La creciente movilización social se concretó a través del surgimiento de nuevos actores, tales como la guerrilla urbana, las ligas agrarias, los sacerdotes del tercer mundo, como así también la redefinición política-ideológica de viejos actores, como sectores del movimiento obrero que luchaban por consignas más combativas, el movimiento estudiantil y su acercamiento a la lucha de los trabajadores, la peronización de las clases medias, etc.

Si bien se cuestionaban las formas tradicionales de la lucha política, nadie pensaba que los “cambios estructurales” podían hacerse por fuera de “la política”. Este proceso de politización de amplios sectores de la sociedad Argentina instalaba un nuevo debate acerca de los métodos para romper radicalmente los modelos económicos-sociales dominantes. La revolución emergía casi como el único y posible camino para modificar el “orden” vigente.

En este contexto, el retorno del peronismo al poder tuvo múltiples significados para cada uno de los actores involucrados. Sin embargo, el proyecto político de Perón, lejos estuvo de plantear una revolución socialista. Por el contrario, su objetivo fue desmovilizar la sociedad y disciplinar los diferentes grupos peronistas. Tanto el Pacto Social como la democracia integrada fueron las herramientas políticas y discursivas para llevar adelante la ofensiva hacia los sectores más radicalizados de la política Argentina.

Las administraciones provinciales que tuvieron la adhesión de los grupos de la izquierda peronista fueron cuestionadas, instalando sobre ellas el fantasma de la intervención desde el mismo 13 de julio, fecha en la que se produjo el desplazamiento de Cárpora y de la izquierda peronista. A la lista la integraron provincias como Córdoba, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Buenos Aires.

En la mayoría de los casos los conflictos provinciales comenzaron por la negativa de aceptar a las autoridades electas, poniendo en tela de juicio la legitimidad de los gobernantes electos. Las acusaciones de “desviación ideológica” no siempre coincidieron con las verdaderas representaciones de los gobernantes, pero sirvió como argumento central para llevar adelante una ofensiva destinada a desplazarlos, con el fin de conquistar el poder por otras vías que no eran las urnas. Se produjo entonces una tensión entre la legitimidad basada en la legalidad democrática y la intención de tomar el poder apelando a una nueva legitimidad que descreía de las elecciones como medio efectivo para producir

los cambios a que aspiraban, concepción válida tanto para la izquierda revolucionaria como para la derecha política-sindical (Lenci: 1999).

Sin embargo, en los casos de las provincias analizadas, ninguno de los gobernadores provenían de la izquierda peronista. Ni Gauna, ni Obregón Cano ni Martínez Baca tenían en su historial político una militancia cercana al peronismo revolucionario: mientras el primero provenía del sindicalismo, los otros dos procedían de la rama política del peronismo. Sus alianzas obedecieron más a tácticas electoralistas que a modificaciones sustanciales en sus posturas ideológicas. En Mendoza y Formosa la fórmula gubernamental se decidió en alianza con el sector sindical, quedando prácticamente toda la cámara de representantes para los sectores más ortodoxos del peronismo. En Córdoba, la tensión fue más fuerte, porque fue la única provincia donde la UOM no pudo imponer su candidato. Por el contrario, la fórmula se completó con Atilio López un dirigente representativo de la Córdoba combativa.

La ofensiva nacional se articuló con la oposición intraperonista que se ejerció en cada una de las administraciones provinciales, articulados a su vez con otros conflictos que cruzaban cada una de las realidades provinciales. En Formosa, la lucha de los campesinos no sólo tuvo un fuerte impacto político en la provincia, sino que además se trasladó al seno del Parlamento Nacional a fin de decidir sobre su intervención. Ciertamente, el proyecto de intervenir la provincia se relacionó directamente con la movilización de este sector y la decisión del gobierno provincial de expropiar tierras a importantes sociedades anónimas extranjeras. En Córdoba, el “navarrazo” y la consecuente intervención federal fue una respuesta autoritaria y violenta de la derecha política-sindical del peronismo para recuperar los espacios perdidos, tanto de la CGT como del gobierno provincial. En Mendoza, el conflicto intra-peronista estuvo centrado en la conquista del poder ejecutivo, lucha que involucró a demócratas y radicales que votaron a favor del juicio político contra el gobernador.

Las autoridades, por su parte, no lograron transferir la legitimidad que les otorgaba la legalidad democrática hacia la defensa de las instituciones políticas y de las normas constitucionales. Desplazaron su fuente de autoridad y legitimidad de los votos a la voluntad de Perón, perdiendo de esta forma autonomía relativa para crear un margen de

espacio político, encontrando dificultades para apropiarse de la iniciativa política, perdiendo eficacia decisoria y efectividad

En todos los casos las instituciones del Estado fueron instaladas como arenas donde se dirimieron las pujas por el poder. Las divisiones internas del campo peronista fueron en crescendo hacia una polarización centrífuga, conducente a políticas inmoderadas o extremistas. Las dos fuerzas principales en pugna por el poder, el peronismo revolucionario y la derecha política sindical, se ubicaron a dos polos de distancia, incompatibles entre sí y mutuamente excluyentes. Estas características se proyectaron a las situaciones provinciales, en las cuales, la polarización existente en el partido de gobierno terminó minando el consenso inaugural del régimen. Perón por su parte desató una ofensiva hacia los sectores de izquierda del peronismo ubicándolos como una oposición antisistema, es decir en términos de Sartori, como una fuerza “extraña” al régimen que socavaba la legitimidad. En esta dirección, apuntó a reestructurar los gobiernos provinciales controlados por gobernantes que habían recibido el apoyo de los sectores más radicalizados del movimiento. (Sartori:1992).

En resumen, la crisis y el derrumbe temprano de las instituciones democráticas en los escenarios provinciales inauguradas en 1973 tuvieron como problemas centrales la pérdida de legitimidad, la ausencia de eficacia y la falta de efectividad de los gobernantes electos para poner en ejecución las decisiones políticas que fueron anticipando el hundimiento del régimen.¹⁸

¹⁸ Juan Linz señala que la eficacia y la efectividad son dos dimensiones importantes que pueden a lo largo del tiempo fortalecer, reforzar, mantener o debilitar la creencia en la legitimidad. Por eficacia se entiende la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político, que son percibidos más como satisfactorios que como insatisfactorios por los ciudadanos conscientes. La efectividad, por su parte, trata otra dimensión, y se refiere a la capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas, con el resultado deseado. Para este autor, en síntesis, el derrumbe de la democracia es el resultado de procesos iniciados por la incapacidad del gobierno de resolver problemas para los cuales las oposiciones desleales se ofrecen como solución. (Linz: 1991)

Bibliografía

- Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco (1994): *Diccionario de Política*, Siglo XXI Editores, 8va. Edición, México.
- Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan (2002): *El asedio a la política*, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
- Cueto, Adolfo y otros: *Historia institucional de Mendoza, I parte, Mendoza*, (1992), Ediciones Culturales de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.
- De Riz, Liliana, *La política en suspenso, 1966-1976* (2000): Col. Historia Argentina, Vol 8, Paidós, Buenos Aires.
- De Riz, Liliana, *Retorno y derrumbe* (1981): Folios Ediciones, México.
- Gordillo, Mónica (editora) (2001): *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa*, Ferreyra Editor, Córdoba.
- Itzcovitz, Victoria, *Estilo de gobierno y crisis política, 1973-1976* (1985): CEAL, Buenos Aires.
- Lacoste, Pablo y Moyano, Rodolfo (2001): *Santiago Felipe Llaver*, Ediciones Culturales de Mendoza, Universidad de Congreso, Mendoza.
- Lenci, María Laura (1999): “Cámpora al gobierno, Perón al poder. La Tendencia Revolucionaria del peronismo ante las elecciones del 11 de marzo de 1973”, en Alfredo Pucciarelli (editor): *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*, Eudeba, Buenos Aires.
- Linz, Juan (1991): *La quiebra de las democracias*, Alianza Editorial, Madrid.
- Morlino, Leonardo (1985): *Cómo cambian los regímenes políticos*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- Prieto, Antonio H. (1990): *Para comprender a Formosa. Una aproximación a la historia provincial*, Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Formosa.
- Romano, Aníbal M. (2000): *La Universidad Nacional de Cuyo y la Revolución Argentina (1966-1973)*, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
- Roze, Jorge, (1992): *Conflictos agrarios en la Argentina/1. El conflicto liguista*, CEAL, Buenos Aires.
- Sartori, Giovanni (1992): *Partidos y sistemas de partidos*, Alianza Editorial, Madrid.
- Servetto, Alicia (1998): *De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada*, Ferreira Editor, Córdoba.
- Torre, Juan Carlos, (1999): “Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista”, en Juan Carlos Torre y otros, *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.